

# Gas a precio "0"

Por: Alberto Bonadona Cossio

**E**l aumento de los impuestos a las petroleras puede ser una medida que acepten estas empresas o parte de ellas. Los medios de comunicación han informado que dos empresas recurrirán a la vía judicial para representar sus derechos frente a cualquier decisión que el Estado boliviano asuma y que consideren afectará sus intereses o modificará las condiciones sobre las cuales iniciaron actividades en Bolivia. Existe, no hay duda, un tema de soberanía incorporado en esta decisión. Sin embargo, no se puede prescindir del peso específico que esas empresas tienen en el futuro de las inversiones necesarias para la exploración y explotación del gas, así como para el ulterior desarrollo de las industrias derivadas de este energético. En el incumplimiento de anteriores compromisos se juega la fe pública, no tanto porque se vea dañada la soberanía, sino porque se crea inseguridad para próximas acciones en la que se exigirá mayores garantías al Estado boliviano.

Si se llega a un acuerdo compartido acerca de las modificaciones tributarias, sin duda, las empresas petroleras aludirán a este tema más temprano que tarde. Especialmente al momento que se tengan posibilidades de futuros emprendimientos. Si no lo hacen las empresas ahora, sería previsor, por parte de los negociadores bolivianos, tomar en cuenta estos aspectos. Considero que existen varias posibilidades de tratos futuros mediatos e inmediatos, que justifican una acción cauta por parte del Estado. Entre las de mayor relevancia, puedo mencionar dos: 1) la revitalización de YPFB y 2) la negociación de un precio cero para el gas que comercializa y puede comercializar YPFB en el mercado interno.

## Un YPFB revitalizado mostrará el nuevo rol del Estado

En cuanto el remozamiento de YPFB es primordial considerar que una de las formas de hacerlo incluye el canje de acciones de las capitalizadas que se encuentran

## para consumo interno

No se trata de regalar el gas al público. Se busca que el energético sea entregado a YPFB SAM a ese precio, y que la nueva empresa pueda comercializarlo internamente. Con los recursos así obtenidos se puede crear un fondo que financie el desarrollo de muchas regiones.



en los Fondos de Capitalización Colectiva. Este canje automáticamente otorgará presencia de YPFB en los directorios de esas empresas y le permitirá contar con un valor de \$US. 750 millones de capital. Acción vital para el futuro del Estado, incuestionable, aunque las empresas pueden ser reticentes al momento de aceptarla. Asimismo, las acciones propias que YPFB emita para realizar el canje harán que los Fondos de Capitalización Colectiva (FCC) no modifiquen su valor y puedan mantener el beneficio del Bonosol. Aparte, esta

transferencia permitirá a YPFB un fortalecimiento inmediato con un valor de 750 millones de dólares nominales, que podrían significar un valor superior al momento de establecerse los valores reales de estas acciones en un mercado bursátil. A la vez logrará que sean los bolivianos, dueños de esas acciones en el FCC, los que continúen ejerciendo esa propiedad con una tangible participación en el nuevo YPFB.

En economía, como en otros campos del pensamiento y de la acción, la oportunidad y las circunstancias que rodean una

medida son por demás relevantes. La condenación de políticas asumidas en un pasado determinado debe ser vistas con resquemor, especialmente sino se hace referencia al contexto en el que se asumieron. No es intelectualmente aceptable condenar a las empresas públicas aduciendo que, por el hecho de ser públicas, son intrínsecamente ineficientes, corruptas y, por lo tanto, naturalmente condenadas al fracaso. Hay más de un caso de empresas con participación estatal, nacional e internacional, que llegaron a alcanzar altos niveles de productividad y rentabilidad.

El gran problema con esas empresas en Bolivia, desde una visión retrospectiva, fue que se convirtieron en botines de políticos y golpistas vencedores, que las usaron discrecionalmente para repartir puestos y devolver favores políticos con fuentes productivas ajenas que se convirtieron en fuentes de enriquecimiento personal. Sin mayor control del Estado o de la sociedad civil o política, esa manera de administrar las empresas estatales adquirió carta de ciudadanía y se tradujo en cultura

y comportamiento socialmente aceptado, sin sanción moral que pese ni condena penal efectiva que inhiba el asalto de la propiedad estatal y sus retornos.

La privatización fue una consecuencia inevitable frente a ese desventurado destino que alcanzaron las empresas públicas en la generalidad de los casos. Las excepciones en Bolivia fueron pocas y en la espiral privatizadora, justos pagaron por pecadores. Fue el caso de ENDE en Bolivia que, hasta donde conozco, fue una empresa pública productivamente ejemplar. No obstante, no se pudo liberar de las presiones irracionales que casi cotidianamente asoman en la vida social y política del país frente a administraciones gubernamentales que no pueden o quieren sustraerse de ellas, como fue, para mencionar una decisión de este tipo, ceder a la construcción de la presa de San Jacinto.

Las condiciones son ahora distintas y, en consecuencia, las oportunidades también. Son estas las que corresponde fructificar con la revitalización de YPFB. Existe el marco regulador en hidrocarburos, al que esta empresa deberá someterse, como también la conciencia ciudadana y las condiciones políticas simbolizadas en la presidencia de Carlos Mesa, como para apremiar el remozamiento de la empresa nacional de hidrocarburos. Una empresa estatal que deberá convertirse en sociedad anónima mixta, al permitir la incorporación de capitales privados o asociándose con intereses privados, al estilo ejemplar que ha logrado la empresa estatal brasilera PETROBRAS.

## Negociar un precio cero del gas

A partir de la revitalización de YPFB, se deben emprender medidas que impulsen el desarrollo nacional basado en una política integral de lo que representan las significativas reservas de gas natural que Bolivia posee. Propongo partir de una negociación con las empresas petroleras de un precio cero para el flujo de gas que se destine al mercado interno el cual sea entregado a YPFB para su transformación y comercialización a precio de mercado. La diferencia entre ambos precios, menos costos operativos de administración, transporte y, cuando corresponda, necesaria transformación, permitirán obtener un considerable excedente que se destinará a la conformación de un fondo para el desarrollo de sectores productivos y sociales. De esta manera, se redefine efectivamente y con respaldo financiero, el nuevo rol del Estado relacionado con la transformación productiva del país.

Los mensajes del Presidente Mesa han demostrado un efectivo tacto político y una excepcional dote pedagógica para llegar con el mensaje preciso y asequible a una gran mayoría de la población.

Nadie puede dudar de su popularidad y su honestidad. En pocas palabras está entregando a la ciudadanía un discurso persuasivo y creíble que genera apoyo y esperanza.

Entre los sectores más suspicaces surgen cuestionamientos que se prefieren mitigar para no levantar olas en momentos que, para todos, son críticos y cruciales para el futuro del país. El actual gobierno tiene la oportunidad de cambiar muchas cosas que no las podría haber hecho ningún otro anterior. Las circunstancias tan delicadas del entorno socio político y la confianza que emana el Presidente favorecen la transformación. Indiscutiblemente, lo político está siendo cubierto dentro de lo descrito pero no está alcanzando lo mismo en el campo económico.

El proyecto de ley de hidrocarburos crea el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) cuyo límite máximo es 32%, aplicable progresivamente en función al tamaño de los campos y el volumen de producción. Al momento las petroleras están lejos de utilizar a plenitud su límite de capacidad productiva y se puede suponer que este impuesto bordeará el 7% sobre una base imponible formada por el valor de la producción en boca de pozo. Es decir, al principio entre el ICH y las regalías, el Estado recaudará un máximo de 25% del valor en boca de pozo. Actualmente la totalidad de los campos en operación producen 665 millones de pies cúbicos por día (MMPCD). Asumiendo mantengan este nivel de producción, en 20 años las petroleras producirán 5 trillones de pies cúbicos (TCF) los que a un precio promedio de \$us. 1,50 el millar de pie cúbico de gas significan alrededor de \$us. 7,500 millones, de los cuales una cuarta parte será para el Estado; o sea \$us. 1,875 millones.

La propuesta consiste en que las transnacionales entreguen el gas para consumo interno a precio "0". Actualmente se consumen 150 MMPCD, en 20 años esto representa alrededor de 1 TCF, en términos monetarios equivalen a \$US. 1,500 millones. Unidas a las regalías (18% que en dinero representa \$US. 1,350 millones) se llega a un total de \$US. 2,850 millones. Así sin necesidad de crear el controvertido ICH se llega a obtener un mejor retorno para Bolivia.

De esta manera se logra una combinación interesante. A las petroleras les conviene el trato porque sacar 150 MMPC al día es marginal a su producción, y siguen pagando el 18% ya acordado. El Estado obtiene una mayor cantidad de recursos, una parte en dinero efectivo y otra en gas. Proporción que puede servir para que internamente se impulsen procesos de industrialización y conformación de redes de protección social a los que el fondo a conformarse con esos recursos apoyaría. La idea debe analizarse con mayor detalle, indudablemente, pero consideramos fundamental ponerla en el tapete de las actuales discusiones ■



Los mensajes del Presidente Mesa han demostrado un efectivo tacto político y una excepcional dote pedagógica para llegar con el mensaje preciso y asequible a una gran mayoría de la población. Nadie puede dudar de su popularidad y su honestidad.